



Unidad de Transparencia de la
Fiscalía General del Estado.
Oficio: 736/2024

Guanajuato, Guanajuato, a 15 de noviembre de
2024

"25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres"

FOLIO DE REFERENCIA: 112093900083724

Distinguido Peticionario:

Me dirijo a Usted en atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 112093900083724, realizada el 08 de noviembre de 2024, bajo el siguiente tenor literal:

"Solicito copia en archivo digital del expediente de la carpeta de investigación [REDACTED], de la agencia del ministerio público [REDACTED], ya que no se me a proporcionado la información solicitada, por parte de la defensoría de oficio, se ingreso un oficio el día 24 de octubre de 2024, y no se obtenido respuesta, dicha información me la proporcionarían desde el día 03 de septiembre de 2024, después de la diligencia en donde me solicitaron que me presentara en carácter de [REDACTED], proporciono mis datos personales los cuales son los siguientes [REDACTED] quien manifiesto ser [REDACTED], con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en [REDACTED], número telefónico [REDACTED], correo electrónico [REDACTED]." (Sic)

Lo marcado en negro es propio.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 11, 12, 13, 15, 23, 24, fracción VI, 94 y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, hago de su conocimiento lo siguiente:

Tomando en consideración los parámetros específicos bajo los cuales formula su petición, es de señalar que no resulta factible proporcionar la información requerida vía acceso a la información, toda vez que el sólo pronunciamiento sobre la existencia o no de una investigación tiene el carácter de reservado, contando en ese sentido con la Resolución 401.C/CT/FGE-2024 que ratifica dicha clasificación, emitida por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, misma que se adjunta al presente.

Ahora bien, es de puntualizarse que lo anterior no significa que se deje en estado de indefensión a las partes, pues se dejan a salvo sus derechos, a fin de que se acuda ante la instancia ministerial substanciadora para que una vez acreditado debidamente su interés jurídico y personalidad, se brinde acceso a los registros de la investigación, así como a los datos que se desprenden de la misma, precisando en tal tesitura que las víctimas y ofendidos, por sí mismas o por conducto de su representante legal podrán ejercer los derechos que están a su disposición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable.

Se informa lo anterior, con base en los dispositivos legales citados supralíneas, así como de conformidad con lo previsto por los artículos 23 y 45, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 7, fracción XXI, 47, 48, fracciones II, III y VI, 85 y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

ATENTAMENTE




UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LIC. GUSTAVO ADOLFO ANGELES SALAZAR,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.



RESOLUCIÓN 401.C/CT/FGE-2024

Guanajuato, Gto., a los 14 catorce días de noviembre del año dos mil veinticuatro.

VISTO para resolver el presente asunto, relativo a la solicitud de confirmación de clasificación de pronunciamiento, realizada con motivo de la petición de acceso a la información tramitada bajo el folio **PNT 112093900083724** con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 08 de noviembre de 2024, se recibió solicitud de acceso a la información con número de folio **112093900083724** consistente en:

"Solicito copia en archivo digital del expediente de la carpeta de investigación [REDACTED], de la agencia del ministerio público [REDACTED], ya que no se me a proporcionado la información solicitada, por parte de la defensoría de oficio, se ingreso un oficio el día 24 de octubre de 2024, y no se obtenido respuesta, dicha información me la proporcionarían desde el día 03 de septiembre de 2024, después de la diligencia en donde me solicitaron que me presentara en carácter de [REDACTED], proporciono mis datos personales los cuales son los siguientes [REDACTED], quien manifiesto ser [REDACTED], con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en [REDACTED], número telefónico [REDACTED], correo electrónico [REDACTED]." (Sic)

Lo marcado en negro es propio.

Segundo: En atención a dicha solicitud el Titular de la Unidad de Transparencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, suscribe y remite a este Órgano Colegiado, oficio 979/2024 a través del cual realiza clasificación del pronunciamiento respecto a la solicitud de acceso a la información identificada bajo el folio **PNT 112093900083724** peticionando a este Comité se pronuncie respecto de dicha clasificación.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información, declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las Áreas Administrativas de la Fiscalía General; lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 54 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- ARGUMENTOS DEL ÁREA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO.

"el pronunciamiento sobre la existencia o no de una investigación debe considerarse reservado, de acuerdo con lo previsto en el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 73 fracción XII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, procediendo de acuerdo a lo referido por el artículo 61 de la Ley aludida, a desarrollar la aplicación de la prueba de daño:



FUNDAMENTOS Y MOTIVOS PARA LA CLASIFICACIÓN PRUEBA DE DAÑO

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.

En el ejercicio de la función constitucional que compete a esta Representación Social, de investigación y persecución del delito, se integran las investigaciones ministeriales a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de delitos, de ahí que en ellas se contenga la substanciación de los actos de investigación realizados, las líneas de investigación, datos de prueba obtenidos, el desahogo de todas y cada una de las diligencias que la integran, así como datos sensibles de los intervinientes en dicho proceso.

En tal sentido, el mero pronunciamiento sobre la existencia o no de investigaciones que en ejercicio de sus funciones integra esta Representación Social, es información reservada en los términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en lo general dispone que los registros de cualquier indagatoria independientemente de su contenido o naturaleza son estrictamente reservados, y sólo las partes pueden tener acceso a los mismos.

Con base en lo anterior, se actualizan la causal de reserva contenidas en las fracciones XIII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y XII del artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como el numeral Trigésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por lo que pronunciarse sobre la existencia de dicha información, se vulneraría el principio de legalidad que rige el actuar de la autoridad, y en consecuencia el estado de derecho que debe prevalecer para mantener el orden jurídico y social.

Abundando en lo anterior, ante la sensibilidad de la información y trascendencia social de la función que se realiza, resulta indispensable mantener el sigilo de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por esta Representación Social, tal es el caso de la información requerida, la cual consiste en copia en archivo digital de una supuesta investigación, en cuyo caso no resulta dable el pronunciamiento acerca de la existencia o no de la misma, y en consecuencia lógica es materialmente imposible emitir una respuesta acerca de la particularidad planteada, siendo de precisar que, en su caso, tal información se constituiría de interés particular al que sólo tienen acceso las partes involucradas.

Como se desprende de lo anterior, atendiendo a la función que por antonomasia a esta Fiscalía le compete, debe prevalecer el interés público de mantener la secrecía de la información respecto de la existencia o no de indagatorias tramitadas en el Ministerio Público, ante el interés particular de conocer determinada información que se contiene en ellas.

No menos importante resulta señalar conforme a lo expuesto, que el legislador ya ha realizado la ponderación entre el derecho de acceso a la información por un lado y por el otro la función constitucional de investigación y persecución del delito.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

El riesgo que se produciría de dar a conocer la información contenida en las investigaciones supone un perjuicio que supera el interés público de que se difunda; lo anterior es así, ya que pronunciarse acerca de la existencia o no de investigaciones a las que la normatividad especial, así como la aplicable en materia de transparencia otorgan el carácter de reservadas podría verse afectado el estado de derecho.

Al respecto, es importante señalar para el caso particular, que el pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación, y en su caso la entrega de copia en archivo digital de la misma, afecta deliberadamente a la sociedad en general, implicando una violación a las obligaciones dotadas de esta Fiscalía en materia de transparencia, puesto que se realizaría la difusión de datos que la ley prevé como reservados, incumpliendo de este modo con el deber de proteger y resguardar la información clasificada.

De lo anterior se advierte que no sólo se vulneran los dispositivos legales aludidos, sino que a la postre se pone en duda la confianza y credibilidad en la institución, ya que no se protege la información recabada con motivo de las pesquisas realizadas en cada una de



las investigaciones a cargo del Ministerio Público, promoviéndose la cultura de la "no denuncia" en la sociedad, generando un riesgo mayor para la persecución e investigación de los delitos.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Expuesto el perjuicio que se causaría al emitir algún pronunciamiento respecto de la información requerida, o en su caso, la entrega de la misma, se considera que esta reserva es la medida idónea y representa el medio menos restrictivo para evitarlo, ya que a través de la limitación de su divulgación, se protege el ejercicio de la función de esta institución y se contrarresta la vulneración de la misma, que se traduce en la investigación y persecución de los delitos.

En segundo término, se estima necesaria la medida para la protección de bienes jurídicos en materia de procuración de justicia y seguridad pública, siendo el medio menos restrictivo disponible para evitar los posibles efectos y consecuencias que pudiera traer tal pronunciamiento.

En este sentido, se considera que la reserva acerca del pronunciamiento de la existencia o no de la carpeta de investigación aludida en la solicitud es proporcional, en contraposición con los efectos y consecuencias que eventualmente pudieran acontecer de llevarse a cabo y que han quedado plasmadas en párrafos anteriores, pues de pronunciarnos acerca de lo requerido, implícitamente se publicitaría información sensible, revelando datos o registros que expresamente se catalogan como reservados y que se tramitan ante esta Representación Social a través del Ministerio Público en el cumplimiento de la atribución constitucional de la investigación y persecución de los delitos, lo que incidiría en los principios y derechos constitucionales del debido proceso.

Aunado a lo anterior, la decisión adoptada no genera perjuicio a la sociedad sino que la protege, además de apegarnos al cumplimiento de las disposiciones legales especiales que establecen la reserva de la información en la materia.

En todo caso, se estima que no se deja en estado de indefensión a las partes, pues quedan a salvo sus derechos, a fin de que se acuda ante la instancia ministerial substanciadora para que una vez acreditado debidamente su interés jurídico y personalidad, se brinde acceso a los registros de una investigación de la que formen parte, así como los datos que se desprendan de la misma.

Por lo antes expuesto, toda vez que se ha acreditado la actualización de los supuestos jurídicos para clasificar la información como reservada, señalando claramente los supuestos normativos que expresamente le otorgan a la información requerida tal carácter, se emite la presente para los efectos de los artículos 54 fracción I y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, precisando que para el caso de la información reservada, esta permanecerá con tal carácter por el periodo de 5 años.

En virtud de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de ésta Fiscalía General de Justicia se pronuncie respecto de la clasificación referida.

FUNDAMENTOS APLICABLES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 6, inciso A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato

Artículo 25. Para el cumplimiento de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

[...]

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

[...]

Artículo 59. Los titulares de las unidades administrativas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información y el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar dichas determinaciones.

Artículo 61. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 73. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:...

[...]

XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter,

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General. Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.

Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente al Comité de Transparencia de ésta Fiscalía General de Justicia:

ÚNICO: Determine la clasificación del pronunciamiento como Reservado."

TERCERO.- ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN.- Con base en los argumentos expuestos por el Titular de la Unidad de Transparencia, así como el marco jurídico que resulta aplicable tanto en materia de transparencia como en la normatividad especial, este Comité procede a realizar el análisis correspondiente respecto de la procedencia de la clasificación realizada.

Para efecto de lo anterior, habremos de retomar en términos generales los argumentos expuestos por el área que clasifica el pronunciamiento (prueba de daño), los cuales en lo total se comparten por este Órgano Colegiado y que en síntesis consisten en lo siguiente:



I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.

Al respecto, mediante razonamientos lógico-jurídicos el Titular de la Unidad de Transparencia explicó y justificó el riesgo de perjuicio al interés público, señalando en resumen de pronunciarse sobre la existencia o no de una investigación, se vulneraría el principio de legalidad y el estado de derecho, al tratarse de información reservada de conformidad con la legislación especial, así como con la normatividad en materia de transparencia.

II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

La Unidad Administrativa que clasifica la información ha justificado que el pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación, y en su caso otorgar copia certificada de la misma afecta deliberadamente a la sociedad en general, implicando una violación a las obligaciones dotadas de esta Fiscalía en materia de transparencia, puesto que se realizaría la difusión de datos que la ley prevé como reservados, incumpliendo de este modo con el deber de proteger y resguardar la información clasificada.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Finalmente en la clasificación quedó debidamente justificado que la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que a través de dicha acción se protege la función de esta institución que se traduce en la investigación y persecución de los delitos.

De tal modo, la medida se considera necesaria para la protección de bienes jurídicos en materia de procuración de justicia y del estado de derecho, considerando que la reserva de la información es proporcional, en contraposición con los efectos y consecuencias que eventualmente pudieran acontecer con su divulgación, puntualizando que tal decisión no genera perjuicio a la sociedad sino que la protege.

**PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO
Y RESERVA DEL PRONUNCIAMIENTO**

Para tales efectos es indispensable tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las competencias y funciones de esta Fiscalía General del Estado, señalando que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo su conducción y mando, además de corresponderle el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial. En análoga disposición, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en su artículo 95, manifiesta que en el Estado de Guanajuato, el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Paralelamente, el artículo 6° constitucional prevé que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases que en la misma se establecen, entre los que se encuentran que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, lo anterior en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Bajo tales premisas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en su artículo 73, establece un catálogo de información reservada, aplicando para el presente caso la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter.



Es importante referir que atendiendo a la naturaleza sensible de las funciones que esta Representación Social realiza, la información requerida, actualiza los supuestos jurídicos señalados supralíneas para considerar como reservado el mero pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación.

De igual relevancia resulta lo que la normatividad especial dispone, concretamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 218 determina que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

Bajo este contexto, se observa que tanto de la legislación especial en materia penal, como de la aplicable en materia de transparencia, se desprenden varias excepciones para el acceso a la información, es decir, se limita a la colectividad al conocimiento de documentos e información generada por los sujetos obligados, y/o, en su caso, a la existencia o no de los mismos, siempre atendiendo a la no vulneración de las tareas que han de desarrollar en sus actividades, en el caso concreto, las tareas que involucran la investigación y persecución del delito.

Asimismo, esta Representación Social se encuentra obligada a observar las limitaciones que marca la Ley para no hacer pública la información de carácter sensible cuya publicación pudiere representar un riesgo latente que afectaría en una proporción mayoritaria los derechos de la ciudadanía en general y, al mismo tiempo, podría vulnerar el sistema de justicia que opera en nuestro Estado y nuestro País. Es por esto que, no deben ser inobservadas las exclusiones que marque la Ley para evitar transgredir el objeto y los principios que deben imperar en el acceso a la información.

En el presente caso, el pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación, y, en su caso, copia en archivo digital de la misma, es información que evidentemente está intrínsecamente relacionada con la posible integración de indagatorias – carpetas de investigación–, por lo que resulta evidente que reúne las características de información reservada, por lo que no es viable otorgarla.

A mayor abundamiento y como refiere el área que clasifica, en los términos señalados en la Constitución Federal, el legislador ha establecido la regulación y base legal que orienta a considerar la información como reservada, identificando las circunstancias que en cada caso deben ocurrir para que la información revista estas características, y determinar a través de la prueba de daño, las razones que justifican que un derecho podría resultar mayormente vulnerado y debe prevalecer sobre el otro, siendo en el presente caso, el derecho de acceso a la información del peticionario y los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la protección de las partes intervinientes en las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos.

En tal sentido, es de señalar que los derechos involucrados no pueden aplicarse simultáneamente, pues la severidad en la afectación a la reserva de los datos contenidos en las investigaciones, resulta mayor que el derecho del ciudadano a acceder a la información de su interés, ya que en la ponderación de ambos prima mantener la secrecía de las investigaciones ante el derecho de acceso a la información.

En tal contexto, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, se ha establecido un catálogo de información reservada que determina qué tipo de información es la que podrá ser clasificada como tal; en segundo término en la legislación especial, particularmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador ha establecido que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, en su caso, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.



En virtud de lo anterior, resulta evidente que el pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación es estrictamente reservado, y no es viable otorgar información al respecto, pues, en su caso, son datos a los que sólo pueden acceder los intervinientes en las mismas.

La determinación que se analiza tiene sustento legal en lo señalado en los artículos 113 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 73 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en los que se establece que como información reservada podrá clasificarse la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter.

En este sentido ha quedado debidamente acreditado la actualización de los supuestos jurídicos contenidos en el numeral Trigésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. Lo anterior se afirma así ya que la información respecto de la existencia o no de una investigación, y, en su caso, copia en archivo digital, actualiza los supuestos normativos que expresamente le otorgan el carácter de reservada.

Del análisis realizado a los elementos que integran la prueba de daño, a los argumentos y fundamentos que sustentan la clasificación del pronunciamiento, así como al objeto jurídico peticionado, este Comité considera que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, pues se han expresado los razonamientos lógico-jurídicos que justifican las consideraciones aplicables al caso concreto, ajustándose a las hipótesis normativas aplicables, así mismo, se han señalado categóricamente los preceptos legales, sustantivos y adjetivos que sustentan la clasificación del pronunciamiento, resultando evidente que el perjuicio emitir pronunciamiento sobre lo peticionado supera el interés público y que realizada la ponderación correspondiente entre otorgar o no la información, la autoridad debe apegarse al marco normativo, siendo hecho probado para este órgano colegiado que el derecho humano de acceso a la información no es ilimitado, ya que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contempla las excepciones a la publicidad de la información, considerando la reserva por razones de interés público y en los términos que fijen las leyes. Consecuentemente, la información solicitada, materia de la clasificación que nos ocupa, efectivamente se encuentra en una de las excepciones de publicidad, regulada por la legislación especial, así como por la normatividad en materia de transparencia.

Asimismo, resultan aplicables al presente las tesis de jurisprudencia que se transcriben a continuación.

Tesis Aislada número P. II/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 74, página 561, de enero de 2020, Décima Época:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.

La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.

Amparo en revisión 661/2014. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. 4 de abril de 2019. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmin Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora



I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, respecto del estudio de los agravios correspondientes; votó en contra del sentido, pero a favor de las consideraciones contenidas en esta tesis: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez.

Tesis Aislada número I.10º.A-79A (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 74, página 561, de enero de 2020, Décima Época:

PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APOORTE. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 149/2018. Amanda Ibáñez Molina. 6 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Roberto César Morales Corona. Esta tesis se publicó el viernes 23 de noviembre de 2018 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Administrativa Tesis: I.10o.A.79 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2318 Tipo: Aislada.

Con base en lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado considera que se actualizan los supuestos jurídicos contenidos en las normas para considerar viable la clasificación de pronunciamiento como reservado, al encuadrar en los límites que en la materia establece el Apartado A, fracción I, así como el sexto párrafo del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo tales premisas, es importante resaltar que en términos de la fracción VI del artículo 25 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato, esta Fiscalía General del Estado está obligada a proteger y resguardar la información clasificada como reservada, no siendo posible para el caso concreto emitir un pronunciamiento acerca de la existencia o no de una investigación, y, en su caso otorgar copia certificada de la misma vía acceso a la información, esto en razón de lo previsto en los dispositivos legales antes invocados.

Así entonces, de conformidad con lo establecido en los artículos previamente mencionados, así como el 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo previsto en los artículos 51, 52, 53, 73 fracciones XI y XII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, este Comité:

RESUELVE

PRIMERO.- El Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, resulta competente para conocer y resolver la clasificación de pronunciamiento realizado por la Unidad Administrativa adscrita a la Fiscalía General del Estado, respecto de la solicitud de acceso a la información identificada bajo el folio **PNT 112093900083724**.



SEGUNDO.- Se **CONFIRMA CLASIFICACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE** *"la existencia o no de una carpeta de investigación"*, con base en los argumentos y fundamentos expuestos los **CONSIDERANDOS SEGUNDO y TERCERO** de la presente Resolución, los cuales se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran.

TERCERO.- El periodo de **RESERVA** se establece por un periodo de 5 cinco años teniendo como inicio la fecha de la presente resolución, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como lo previsto en las leyes especiales de la materia.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al ciudadano y al Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como a las Unidades Administrativas solicitantes, respecto a la procedencia de la clasificación del pronunciamiento.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos.

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**LIC. LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE.**

**LIC. CARLOS ANTONIO FRANCO ANDRADE
VOCAL.**

**LIC. NOEMÍ DEL CARMEN MORENO BUSTOS.
SECRETARIA.**